



Asamblea General

Distr. general
17 de diciembre de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 92º período de sesiones, 15 a 19 de noviembre de 2021

Opinión núm. 53/2021, relativa a Ahmed Majed Ahmed al-Atoum (Emiratos Árabes Unidos)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 5 de agosto de 2021 al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos una comunicación relativa a Ahmed Majed Ahmed al-Atoum. El Gobierno respondió a la comunicación el 4 de octubre de 2021. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

¹ [A/HRC/36/38](#).



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Ahmed Majed Ahmed al-Atoum es un ciudadano jordano nacido en 1975. Desde 2014, reside en Shakhbout (Abu Dabi). Está casado y es padre de dos hijos.

5. Según la fuente, el Sr. Al-Atoum trabaja como docente en una escuela privada. Es un activista en línea pacífico que ha hecho campaña contra la corrupción en Jordania. Unos meses antes de su detención, había presentado una solicitud de asilo ante la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en los Emiratos Árabes Unidos, por temor a sufrir represalias en Jordania.

a) Detención y privación de libertad

6. La fuente informa que el 14 de mayo de 2020, mientras el Sr. Al-Atoum compraba pan en una panadería de Shakhbout (Abu Dabi), fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado. Los miembros de las fuerzas de seguridad que practicaron la detención iban enmascarados y no presentaron ninguna orden de detención en el momento de esta. Los empleados de la panadería fueron testigos de la detención.

7. Según la fuente, tras la detención del Sr. Al-Atoum, las fuerzas de seguridad entraron en su casa por la fuerza y se llevaron su pasaporte, su computadora portátil y su teléfono celular, y acto seguido registraron su automóvil y retiraron su contenido. Hasta la fecha, las autoridades se han negado a reconocer que se incautaron de su pasaporte durante el registro. La familia del Sr. Al-Atoum teme que la retención del pasaporte se utilice para facilitar su expulsión a su país de origen. Posteriormente, el 12 de agosto de 2020, la cuenta de Facebook del Sr. Al-Atoum fue desactivada antes de ser reactivada de nuevo.

8. La fuente alega que, inmediatamente después de su detención, el Sr. Al-Atoum fue enviado a la prisión de Al-Wathba, en Abu Dabi, donde estuvo recluido en régimen de incomunicación durante casi dos meses y medio. Permaneció detenido allí en régimen de aislamiento hasta el 14 de enero de 2021.

b) Cargos y juicio

9. La fuente informa de que el 27 de julio de 2020, el Sr. Al-Atoum compareció ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi. Se le acusó, en virtud del Decreto-ley Federal núm. 5 de 2012, de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ley de Ciberdelincuencia), por algunos de sus mensajes en Facebook, en los que criticaba a las autoridades de Jordania por cuestiones relacionadas con la corrupción.

10. En particular, el Sr. Al-Atoum fue acusado de cometer acciones deliberadas contra un país extranjero que perjudican las relaciones políticas, de utilizar medios digitales para publicar información que pone en peligro la seguridad y los intereses superiores del Estado y que atenta contra el orden público, y de difundir intencionadamente noticias y datos falsos y malintencionados que perturban la seguridad pública y menoscaban el interés público.

11. Las vistas judiciales del Sr. Al-Atoum tuvieron lugar el 28 de julio de 2020, el 12 de agosto de 2020 y el 23 de septiembre de 2020. El 7 de octubre de 2020, fue condenado a diez años de prisión, con una orden de expulsión al término de su condena, además del decomiso de sus dispositivos de comunicación y la eliminación de sus cuentas en los medios sociales.

12. Según la fuente, en la sentencia condenatoria del señor Al-Atoum se mencionaron los mensajes que figuran a continuación, que supuestamente había escrito en su cuenta de Facebook. La fuente no ha podido encontrar en el perfil de Facebook del Sr. Al-Atoum todos los mensajes que se citan y considera que es posible que las autoridades modificaran el contenido del perfil cuando se incautaron de su teléfono y pudieron acceder a su cuenta a raíz de su detención:

a) Mensaje 1, de 10 de noviembre de 2019: “El rey (de Jordania) admite que la patria es su responsabilidad y que cualquier comentario debe ir dirigido únicamente a él”; “todas las penurias que sufrimos (pobreza, humillaciones, prisiones y falta de libertad de expresión) son culpa del fracaso del rey, que Dios le guíe”;

b) Mensaje 2, de 14 de noviembre de 2019: “Que la paz sea con el Profeta. Sabed que no existe tal cosa llamada Jordania, el Gobierno solo sirve a Abu Al-Hussein y a su familia. Creo que las propiedades del Ministerio de Transportes y Relaciones Exteriores, que antes dirigía un pariente del Príncipe Hassan, han sido transferidas a los parientes de la Reina Rania, lo cual significa que la Reina puede desarrollar ahora nuevos proyectos en este ámbito y en sus actividades de *marketing* mundial”;

c) Mensaje 3, de 14 de noviembre de 2019: “En cuanto a la acusación de socavar el régimen: el régimen es una monarquía hereditaria con un sistema de representación parlamentaria. Cualquiera que diga que le sorprende ver a un miembro del Parlamento el domingo, debería ser enjuiciado por socavar el régimen del Estado, si este fuera un Estado de derecho dotado de instituciones propiamente dichas”;

d) Mensaje 4, de 14 de noviembre de 2019: “En respuesta al Presidente de Ucrania, Jefe del Estado de la Sagrada Corrupción, se advierte a los ciudadanos de que todo aquel que revele un caso de corrupción será considerado como el responsable absoluto de ese caso y como recompensa se le imputarán dos cargos, uno de asesinato y otro de atentado contra el sistema de gobierno. La experiencia del Estado en esta materia se transferirá al Estado vecino afligido”.

13. Según la fuente, el tribunal concluyó que el Sr. Al-Atoum “publicó los mensajes anteriores con la intención de burlarse de Jordania cuando afirma que quienes denuncian casos de corrupción en ese país pueden ser detenidos”. En la sentencia también se recoge que “el acusado admitió que odia al Gobierno de Jordania porque fue acosado por los servicios de seguridad antes de abandonar el país”.

14. El Sr. Al-Atoum fue condenado por haber infringido los artículos 82, 166, 197, párrafo 2, y 201, párrafo 7, del Código Penal y los artículos 24, 28 y 42 de la Ley de Ciberdelincuencia.

15. La fuente informa de que, en su sentencia, el tribunal explicó que estas disposiciones habían sido infringidas con los actos siguientes:

a) “Ofender deliberadamente a un país extranjero (Jordania) en su cuenta de Facebook, al publicar noticias e información que contienen burlas e insultos degradantes contra el Reino Hachemita de Jordania, su Rey y su Gobierno, lo cual puede dañar las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania”;

b) “Publicar contenido en el citado sitio web (Facebook) conforme a lo descrito en la primera acusación, y valerse de los medios digitales para promover y favorecer ideas que pueden incitar a la discordia y perturbar el orden público y la paz social”;

c) “Utilizar los medios digitales y el sitio web mencionado (Facebook) en la primera acusación para difundir la información indicada en el informe, que pone en peligro la seguridad y los intereses supremos del Estado y atenta contra el orden público”.

16. El 4 de noviembre de 2020, el abogado del Sr. Al-Atoum solicitó una revisión judicial ante el Tribunal Supremo Federal. El 28 de diciembre de 2020, la solicitud fue declarada inadmisibile.

c) Análisis de las vulneraciones cometidas

i. Categoría I

17. La fuente sostiene que el 14 de mayo de 2020, el Sr. Al-Atoum fue detenido sin que se le presentara una orden judicial. No se le dio ninguna razón para su detención. La fuente señala que no fue detenido en flagrante delito, lo que podría haber hecho innecesaria una orden de detención.

18. Por lo tanto, la detención del Sr. Al-Atoum carecía de fundamento jurídico y, en consecuencia, infringía el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece que la Fiscalía debe, “en función de las circunstancias”, emitir una orden judicial de detención contra la persona imputada. La detención del Sr. Al-Atoum también vulneró sus derechos amparados por los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y el artículo 14, párrafo 1, de la Carta Árabe de Derechos Humanos.

19. La fuente alega que durante los primeros dos meses y medio de su reclusión, el Sr. Al-Atoum no fue informado de los cargos que se le imputaban. Hasta el 27 de julio de 2020 no se le comunicaron los cargos, lo que vulnera su derecho a ser informado sin demora de los motivos de la detención y de los cargos que se le imputan, consagrado en el artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, el principio 10 del Conjunto de Principios y el artículo 14, párrafo 3, de la Carta Árabe.

20. El Sr. Al-Atoum fue víctima de desaparición forzada durante dos meses y medio. La fuente sostiene que la desaparición forzada es a todas luces una forma de detención arbitraria y, por lo tanto, el período en el que Sr. Al-Atoum estuvo desaparecido forzosamente supuso una vulneración de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 22 de la Carta Árabe. La desaparición forzada del Sr. Al-Atoum también infringió los artículos 26 y 28 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos, en los que se establece el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.

21. La fuente afirma que, al ser sustraído del amparo de la ley durante dos meses y medio, el Sr. Al-Atoum se vio privado de las garantías jurídicas que asisten a las personas privadas de libertad, como el derecho a impugnar la legalidad de su detención (*habeas corpus*) y el derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial. Esto supuso una vulneración de los derechos del Sr. Al-Atoum reconocidos en los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 14, párrafo 6, y 22 de la Carta Árabe, los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios, y los principios 8 y 10 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal².

22. La desaparición forzada del Sr. Al-Atoum lo privó de su derecho a impugnar la prolongación de su detención más allá del período legal de siete días (renovable por otro período no superior a 14 días) en virtud del artículo 110 del Código de Procedimiento Penal.

ii. Categoría II

23. Según la fuente, el Sr. Al-Atoum fue condenado en un principio por “ofender deliberadamente a un país extranjero (Jordania) en su cuenta de Facebook”, “publicar contenido en [su cuenta de Facebook] conforme a lo descrito en la primera acusación, y valerse de los medios digitales para promover y favorecer ideas que pueden incitar a la discordia y perturbar el orden público y la paz social”, y “utilizar los medios digitales y el sitio web mencionado (Facebook)... para difundir la información indicada en el informe, que pone en peligro la seguridad y los intereses supremos del Estado y atenta contra el orden público”.

24. Independientemente de la cuestión de si los mensajes supuestamente publicados en Facebook existieron³, la fuente sostiene que el Sr. Al-Atoum fue condenado por delitos tipificados en el Código Penal y en la Ley de Ciberdelincuencia, que están definidos de manera imprecisa y que vulneran el derecho a la libertad de opinión y de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

² A/HRC/30/37, anexo.

³ Según la fuente, es imposible verificar la acusación formulada por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos en relación con el contenido que presuntamente publicó el Sr. Al-Atoum, ya que su cuenta de Facebook fue suspendida temporalmente por las autoridades.

25. El Sr. Al-Atoum fue condenado en virtud del artículo 166 del Código Penal, en el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión para quien cometa cualquier acto hostil contra un país extranjero que pueda exponer a los Emiratos Árabes Unidos al peligro de una guerra o provocar la ruptura de las relaciones diplomáticas. La fuente recuerda que esta disposición se utilizó contra un intelectual de los Emiratos Árabes Unidos que fue condenado a dos años de prisión por haber publicado una serie de tuits en los que criticaba de manera directa o implícita a las autoridades de Egipto, y cuya detención ya fue examinada por el Grupo de Trabajo⁴.

26. La fuente sostiene que resulta igualmente preocupante el artículo 197, párrafo 2, del Código Penal, también invocado contra el Sr. Al-Atoum, en el que se prevén castigos para quien haga uso de cualquier medio de comunicación para difundir información o noticias que menoscaben la seguridad del Estado o sean incompatibles con la política del Estado, o para instigar actos a tales efectos. El hecho de que el término “políticas del Estado” no esté definido en el Código Penal hace que esta disposición se preste a una interpretación poco precisa y al abuso.

27. Además, la fuente afirma que el Sr. Al-Atoum fue condenado con arreglo a varias disposiciones de la Ley de Ciberdelincuencia. Dicha ley confiere a las autoridades amplios poderes de censura, lo que contraviene las normas internacionales⁵. El Sr. Al-Atoum fue condenado por delitos imprecisos, como publicar en su cuenta de Facebook información “para promover y favorecer ideas que pueden incitar a la discordia y perturbar el orden público y la paz social”, punible en virtud del artículo 24 de la Ley de Ciberdelincuencia. También fue condenado por haber publicado noticias que podían poner en peligro la seguridad nacional y los intereses superiores del Estado o socavar el orden público, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Ciberdelincuencia.

28. Según la fuente, se privó injustamente al Sr. Al-Atoum de su libertad, en clara contravención del derecho a la libertad de opinión y de expresión establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente añade que las disposiciones en que se fundamentó la condena del Sr. Al-Atoum carecen de seguridad jurídica, ya que una norma, para ser calificada de “ley”, debe estar formulada con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella⁶.

29. En cuanto a la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad, la fuente afirma que la detención, la privación de libertad, el enjuiciamiento y la condena del Sr. Al-Atoum por sus comentarios en línea no pueden considerarse proporcionados. Si bien el mantenimiento de relaciones de amistad con una nación extranjera —Jordania, en este caso— puede ser un objetivo legítimo, no puede establecerse un vínculo razonable entre ese objetivo y el silenciamiento de una persona que ha denunciado actos de corrupción de manera pacífica en los medios sociales.

iii. Categoría III

30. La fuente sostiene que la detención del Sr. Al-Atoum es arbitraria debido a las graves vulneraciones de su derecho a un juicio imparcial.

31. A pesar de su prolongada reclusión, el Sr. Al-Atoum solo pudo reunirse con su asesor letrado durante las vistas judiciales. Su abogado no pudo visitarlo en prisión para preparar su defensa antes del juicio. La fuente sostiene que ese hecho constituyó una vulneración del derecho del Sr. Al-Atoum a la asistencia letrada durante la fase de instrucción del proceso, previsto en el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal. También constituyó una vulneración de su derecho a recibir asistencia letrada, disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa y la igualdad de medios procesales, garantizado en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Carta Árabe y el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos.

⁴ Opinión núm. 76/2017, párr. 70.

⁵ Véase Access Now, comunicación para el tercer ciclo del examen periódico universal de los Emiratos Árabes Unidos, enero de 2018. Disponible en <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRUnitedArabEmiratesStakeholdersInfoS29.aspx>.

⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), párr. 25.

32. Asimismo, la desaparición forzada inicial del Sr. Al-Atoum anuló intrínsecamente la esencia del derecho a recibir asistencia letrada, a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa y a la libre comunicación con un asesor letrado, garantizado en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

33. La fuente declara que el Sr. Al-Atoum fue condenado por la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi el 7 de octubre de 2020. De acuerdo con la fuente, su caso fue, por tanto, examinado en el nivel de apelación sin haber sido examinado por un tribunal de primera instancia. Cuando el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi actúa en calidad de Tribunal de Seguridad del Estado, lo hace como tribunal de primera instancia y de apelación.

34. El 4 de noviembre de 2020, el abogado del Sr. Al-Atoum solicitó una revisión judicial ante el Tribunal Supremo Federal.

35. La fuente recuerda que la revisión judicial debe distinguirse de un proceso de apelación. Mientras que un recurso de apelación suele presentarse para impugnar la decisión de un caso concreto sobre la base de un examen exhaustivo del fondo, en una revisión judicial se analiza la forma en que un órgano público llegó a su decisión para determinar si esta fue o no conforme a derecho. Si el Tribunal Supremo Federal considera que la solicitud de revisión judicial es admisible, puede ordenar la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal inferior, que en el presente caso hubiera sido el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi. En cualquier caso, la solicitud de revisión judicial interpuesta por el abogado del Sr. Al-Atoum se consideró inadmisibles.

36. En consecuencia, la fuente sostiene que no se respetó el derecho del acusado a que el fallo condenatorio y la pena que se le impusieron fueran sometidos a un tribunal superior, lo que contraviene los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las normas imperativas (*ius cogens*) del derecho internacional consuetudinario, y el artículo 16, párrafo 7, de la Carta Árabe.

37. La fuente señala que, a pesar de que la Constitución reconoce la independencia del poder judicial, no garantiza explícitamente el principio de la separación de poderes ni delimita claramente las competencias de los distintos poderes del Estado⁷. De hecho, el poder ejecutivo controla en la práctica el poder judicial, además de que así lo disponen distintas leyes.

38. En 2015, la entonces Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó su preocupación porque el mecanismo vigente para el nombramiento de los jueces carecía de transparencia y podía exponerlos a presiones políticas indebidas. En particular, el Presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Federal son nombrados por decreto presidencial, previa aprobación del Consejo de Ministros y ratificación del Consejo Supremo Federal. Otros jueces federales son nombrados por decreto presidencial, previa propuesta del Ministro de Justicia⁸.

39. La fuente sostiene que ni el Tribunal Federal de Apelación ni el Tribunal Supremo Federal, que examinaron la solicitud de revisión judicial presentada por el abogado del Sr. Al-Atoum, pueden considerarse tribunales independientes e imparciales en el sentido del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

iv. Elementos adicionales

40. La fuente afirma que al Sr. Al-Atoum se le ha negado el acceso a una atención médica adecuada, a pesar de que padece un desequilibrio hidroelectrolítico en el cerebro. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos están obligadas a realizar un reconocimiento médico apropiado a las personas detenidas tan pronto como sea posible tras su ingreso en el lugar de detención y, posteriormente, a proporcionarles atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, de acuerdo con el principio 24 del Conjunto de Principios y la regla 30

⁷ A/HRC/29/26/Add.2, párr. 30.

⁸ *Ibid.*, párr. 35.

de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

41. La fuente señala que, aunque los familiares del Sr. Al-Atoum se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades no les han permitido visitarlo desde su detención. También se impide a su familia hablar en público sobre el caso o comunicarse con la Embajada del Reino Unido para recabar noticias sobre la solicitud de asilo presentada por el Sr. Al-Atoum.

42. Según la fuente, el Sr. Al-Atoum fue víctima de desaparición forzada y estuvo en régimen de incomunicación durante los primeros dos meses y medio de su detención. Permaneció recluso en régimen de aislamiento desde el momento de su detención hasta el 14 de enero de 2021. Dado que una persona desaparecida es sustraída del amparo de la ley, la desaparición forzada propicia la tortura y los malos tratos, y constituye una forma de tortura en sí misma, tanto para la persona desaparecida como posiblemente para sus familiares⁹. Además, según la regla 43, párrafo 1 b), y la regla 44 de las Reglas Nelson Mandela, el aislamiento prolongado, por un período superior a 15 días consecutivos, constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

43. A la fecha de la comunicación de la fuente, aún no se había permitido a la familia del Sr. Al-Atoum reunirse con él. Su familia está preocupada por su bienestar físico y psicológico en prisión y por las consecuencias de la reclusión en régimen de aislamiento. La fuente recuerda que la reclusión prolongada en régimen de incomunicación y aislamiento ofrece indicios razonables de un incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, y del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁰. Asimismo, al someter al Sr. Al-Atoum a una desaparición forzada y una reclusión prolongada en régimen de aislamiento, los Emiratos Árabes Unidos incumplieron las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Respuesta del Gobierno

44. El 5 de agosto de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que proporcionara, a más tardar el 5 de octubre de 2021, información detallada sobre la situación del Sr. Al-Atoum. El Grupo de Trabajo pidió también al Gobierno que aclarase las disposiciones legales que justificaban que siguiera privado de libertad, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por los Emiratos Árabes Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

45. El Gobierno respondió el 4 de octubre de 2021. Señala que, el 14 de mayo de 2020, el Sr. Al-Atoum fue detenido de conformidad con las normas y principios jurídicos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos. El Sr. Al-Atoum fue informado del motivo de su detención, y se le presentó una orden de detención y registro, que examinó con detalle y pudo entender. El Sr. Al-Atoum también recibió información sobre la autoridad que llevó a cabo la detención y el registro, y sobre el lugar de su detención.

46. El 7 de junio de 2020, el Sr. Al-Atoum pasó a disposición de la Fiscalía. El 27 de julio de 2020, la Fiscalía remitió el expediente al tribunal competente y acusó al Sr. Al-Atoum de los siguientes hechos delictivos:

- a) Cometer un acto hostil contra un país extranjero;
- b) Utilizar la tecnología digital para difundir información que podría poner en peligro la seguridad del Estado y sus intereses superiores y atentar contra la seguridad pública;
- c) Difundir deliberadamente noticias y declaraciones falsas y tendenciosas que perturban la seguridad pública y menoscaban el interés público;

⁹ Hernández Colmenarez y Guerrero Sánchez c. la República Bolivariana de Venezuela (CAT/C/54/D/456/2011), párr. 6.4.

¹⁰ Opinión núm. 47/2017, párr. 26.

d) Crear un sitio web en una red de información, o a través de la tecnología de la información, para promover o favorecer cualquier programa o idea que incite a la sedición, el odio, el racismo o el sectarismo, o que socave la unidad nacional o la paz social, o perturbe el orden público y las buenas costumbres.

47. El 7 de octubre de 2020, el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi condenó al Sr. Al-Atoum a diez años de prisión y a la expulsión del país al término de su condena. El Sr. Al-Atoum recurrió la sentencia. El 28 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo Federal desestimó el recurso y confirmó la sentencia dictada.

48. El Gobierno subraya que el Sr. Al-Atoum no fue detenido arbitrariamente, sino que fue detenido de conformidad con los procedimientos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente cumple su condena en un centro penitenciario sometido al control y la supervisión de la Fiscalía. El centro cumple todas las normas necesarias para garantizar la seguridad de los reclusos en lo que respecta al suministro de alimentos, el entorno, la climatización, la ventilación, el entretenimiento, las visitas de los familiares y las comunicaciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal núm. 43 de 1992, de Regulación de los Centros Penitenciarios.

49. Asimismo, el Gobierno afirma que el Sr. Al-Atoum no ha sido sometido a ninguna forma de tortura u otros tratos crueles o inhumanos, ni privado de los derechos que le garantiza la legislación federal vigente en el país, que se ajustan a los principios universales de los derechos humanos. La Constitución establece la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe el trato degradante en todas sus formas.

50. Al Sr. Al-Atoum se le ha permitido recibir visitas y llamadas telefónicas. A raíz de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en vista de las medidas de precaución adoptadas en el país para proteger del contagio a los reclusos de las instituciones penitenciarias, la comunicación se limitó a llamadas telefónicas. Con todo, el Sr. Al-Atoum ha mantenido un contacto regular con sus familiares, y la última llamada fue el 3 de septiembre de 2021.

51. En virtud de la legislación federal vigente en los Emiratos Árabes Unidos, toda persona encausada cuyo caso se haya presentado ante un tribunal tiene derecho a nombrar un abogado con el fin de hacer efectivo el principio del derecho a la defensa garantizado por la legislación a todas las personas sin establecer diferencias ni discriminaciones. Si el acusado no está en disposición de nombrar un abogado a sus expensas, el tribunal debe asignarle un abogado sin que el acusado tenga que sufragar los gastos. En consecuencia, se designó a un abogado para que representase al Sr. Al-Atoum en todas las fases del procedimiento.

52. El proceso contra el Sr. Al-Atoum, desde la fase de instrucción hasta el momento en que se dictó la sentencia, se llevó a cabo con sujeción al marco jurídico de las leyes federales aplicables. La Fiscalía supervisa las labores de investigación e inferencia y es la única autoridad competente para iniciar los procedimientos de investigación, acusación e interrogatorio. Todo juicio se celebra ante un tribunal imparcial y competente con jueces especializados e íntegros que gozan de total independencia para dictar sentencia y desempeñar sus funciones de conformidad con la Constitución y la legislación nacional. La legislación garantiza también las normas que rigen un juicio imparcial.

53. Todos los reclusos de los centros penitenciarios de los Emiratos Árabes Unidos tienen derecho a la atención sanitaria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal núm. 43 de 1992, de Regulación de los Centros Penitenciarios. En esa disposición se establece la obligación de elaborar un expediente completo sobre el bienestar físico y psicológico de cada recluso. A este respecto, el Gobierno señala que el Sr. Al-Atoum sigue recibiendo la atención médica necesaria y se encuentra en buen estado de salud, y que su último reconocimiento médico tuvo lugar el 1 de septiembre de 2021, en el que se le realizó, entre otras cosas, una prueba de COVID-19 con resultado negativo.

54. El Gobierno afirma que, a la luz de la pandemia de COVID-19, ha intensificado la realización de pruebas de diagnóstico de la COVID-19 tanto a los miembros de la sociedad en general como a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios con el fin de comprobar que no estén infectadas. En caso de confirmarse la infección, el paciente es aislado y puesto en cuarentena y recibe la atención sanitaria que necesite. Los Emiratos Árabes

Unidos prestan especial atención a las personas internadas en centros penitenciarios al objeto de cumplir todas las normas impuestas en virtud de los principios internacionales de derechos humanos.

Comentarios adicionales de la fuente

55. La fuente sostiene que los miembros de las fuerzas de seguridad que detuvieron al Sr. Al-Atoum no presentaron una orden judicial. Señala que el Gobierno no especificó la autoridad responsable de emitir la orden de detención, ni las fuerzas responsables de ejecutarla. Además, el Gobierno no aportó ninguna prueba documental, por ejemplo, una copia de la orden de detención y registro.

56. La fuente se remite a la afirmación del Gobierno de que el Sr. Al-Atoum compareció ante la Fiscalía el 7 de junio de 2020. El Sr. Al-Atoum estuvo, por tanto, privado de libertad durante 24 días antes de comparecer ante la Fiscalía a pesar de que en el artículo 47 del Código de Procedimiento Penal se establece que las personas detenidas deben pasar a disposición de la Fiscalía en un plazo de 48 horas. Esta disposición queda anulada por el artículo 28 de la Ley núm. 2 de 2003, del Aparato de Seguridad del Estado, que las autoridades no han hecho pública. Esta ley permite a los órganos de seguridad del Estado retener a una persona detenida hasta 90 días sin remitir el caso a la Fiscalía si el jefe del aparato de seguridad del Estado lo autoriza. El Gobierno no especifica si al Sr. Al-Atoum se le aplicó esa disposición.

57. Además, la respuesta del Gobierno plantea interrogantes acerca del respeto del derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial y de la obligación de garantizar el control judicial de la detención. Según el Gobierno, el Sr. Al-Atoum fue informado de los cargos que se le imputaban el 27 de julio de 2020, más de diez semanas después de su detención, cuando su caso fue “remitido [...] al tribunal competente”. La fuente afirma que este retraso vulneró el derecho del Sr. Al-Atoum a ser informado sin dilación de los cargos que se le imputaban. Entre el 14 de mayo de 2020 y el 27 de julio de 2020, el Sr. Al-Atoum no pudo impugnar de manera efectiva la legalidad de su detención, ya que desconocía los cargos que se le imputaban.

58. La respuesta del Gobierno revela que el Sr. Al-Atoum no fue llevado sin dilación ante la autoridad judicial. Las demoras de más de 48 horas tras la detención se consideran excesivas. Sin embargo, el Gobierno confirma que el Sr. Al-Atoum no compareció ante una autoridad judicial hasta el 27 de julio de 2020, un día antes de que empezara el juicio. Aunque el Gobierno alegue que el Sr. Al-Atoum fue puesto a disposición de la Fiscalía el 7 de junio de 2020, por lo general los fiscales no se consideran funcionarios judiciales a estos efectos, ya que no tienen la objetividad e imparcialidad institucionales necesarias para actuar como tales y decidir sobre la legalidad de la detención.

59. La fuente se remite al artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece que la Fiscalía puede prolongar la prisión preventiva hasta un máximo de 21 días. Una vez transcurrido ese plazo, la persona detenida debe comparecer ante una autoridad judicial, que puede prorrogar la privación de libertad. La respuesta del Gobierno no refleja esta obligación interna.

60. Si bien el Gobierno reitera los cargos presentados contra el Sr. Al-Atoum, se abstiene de referirse a su detención injusta por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y de expresión. El Sr. Al-Atoum fue acusado y posteriormente condenado por delitos tipificados en el Código Penal y en la Ley de Ciberdelincuencia que están definidos de manera imprecisa y que vulneran el derecho a la libertad de opinión y de expresión amparado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

61. Además, la fuente se refiere a la afirmación del Gobierno de que el Sr. Al-Atoum no fue detenido arbitrariamente, sino de conformidad con las normas y principios jurídicos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos. Según el Gobierno, el Sr. Al-Atoum actualmente cumple condena en un centro penitenciario sometido al control y la supervisión de la Fiscalía. La fuente hace hincapié en que el Gobierno no indicó las disposiciones que se aplicaron para justificar la privación de libertad del Sr. Al-Atoum.

62. El Gobierno afirma que el centro penitenciario en el que está interno el Sr. Al-Atoum cumple todas las normas necesarias para garantizar la seguridad de los reclusos. Sin embargo, no ha proporcionado una descripción detallada de dicho centro y solamente se refiere a la reclusión actual del Sr. Al-Atoum, sin explicar nada sobre los dos meses y medio en que estuvo detenido en régimen de incomunicación.

63. El caso del Sr. Al-Atoum concuerda con las conclusiones de la antigua Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Aunque en el Código de Procedimiento Penal se establece que, a menos que una persona sea detenida en flagrante delito, debe presentarse una orden de detención, la Relatora Especial recibió numerosas denuncias de detenciones sin orden de detención. En muchos de esos casos, las personas detenidas fueron acusadas posteriormente de delitos contra la seguridad del Estado. Tras haber sido detenidas por agentes de seguridad del Estado, la mayoría de esas personas fueron llevadas a centros de detención secretos donde se las mantuvo incomunicadas durante días, semanas o incluso meses, algunas a veces en régimen de aislamiento. En algunos casos, dichas detenciones pudieron equivaler a una desaparición forzada, ya que las autoridades se negaron a reconocer que habían detenido a la persona o a revelar su suerte y paradero¹¹.

64. La fuente hace referencia a la negación por parte del Gobierno de que el Sr. Al-Atoum haya sido sometido a tortura u otros tratos crueles o inhumanos, o privado de los derechos que le garantiza la legislación federal. El Sr. Al-Atoum fue víctima de desaparición forzada y estuvo en régimen de incomunicación durante los primeros dos meses y medio de su detención. Además, permaneció recluido en régimen de aislamiento hasta el 14 de enero de 2021. El Gobierno no formuló ningún comentario acerca de la detención en régimen de incomunicación del Sr. Al-Atoum ni sobre su reclusión en régimen de aislamiento.

65. En cuanto al derecho a recibir visitas y llamadas telefónicas, el Gobierno únicamente se refiere a la situación actual del Sr. Al-Atoum, sin dar explicaciones sobre el período inicial de su detención. Mientras el Sr. Al-Atoum estuvo detenido en régimen de incomunicación, no pudo ponerse en contacto con su familia para informarles de su suerte y paradero. Mientras estuvo recluido en régimen de aislamiento, solo se le permitió llamar a un familiar una vez al mes durante dos minutos. Actualmente se comunica con ese familiar todas las semanas. El Sr. Al-Atoum no ha recibido ninguna visita desde el comienzo de su privación de libertad. No se le permite hacer llamadas internacionales, a pesar de que, a excepción de un miembro de su familia, esta se encuentra actualmente en el extranjero.

66. Con respecto a la afirmación del Gobierno de que el Sr. Al-Atoum pudo reunirse con su abogado cuando compareció ante el tribunal y durante el posterior proceso judicial, la fuente sostiene que el Gobierno admite de ese modo que el Sr. Al-Atoum no tuvo acceso a asistencia letrada desde el comienzo de su detención, en particular durante el interrogatorio. La fuente señala que eso supone una vulneración del principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. La Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha recomendado que toda persona detenida tenga acceso a un asesor letrado en las 24 horas posteriores a la detención¹².

67. El Gobierno alega que el proceso contra el Sr. Al-Atoum se llevó a cabo con sujeción al marco jurídico de las leyes federales aplicables. Sin embargo, la fuente recuerda que el Sr. Al-Atoum fue juzgado por la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi, y que su solicitud de revisión judicial fue examinada por el Tribunal Supremo Federal. Estos tribunales no pueden calificarse de “independientes e imparciales” en el sentido del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que, en la práctica, el poder ejecutivo controla el poder judicial en los Emiratos Árabes Unidos.

68. Por otra parte, la fuente señala que el Gobierno no ofreció aclaraciones sobre la vulneración del derecho del Sr. Al-Atoum a que el fallo condenatorio y la pena impuesta fueran sometidos a un tribunal superior. Según la legislación vigente, cuando el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi actúa en calidad de Tribunal de Seguridad del Estado, lo hace como tribunal de primera instancia y de apelación. En relación con la sentencia del Tribunal Supremo Federal de 28 de diciembre de 2020, la fuente recuerda que dicho Tribunal

¹¹ A/HRC/29/26/Add.2, párr. 51.

¹² E/CN.4/1990/17, párr. 272 c); E/CN.4/1995/34, párr. 926 d); y A/56/156, párr. 39 f).

también había examinado una solicitud de revisión judicial interpuesta por la defensa el 4 de noviembre de 2020.

69. Por último, la fuente se remite a la información proporcionada por el Gobierno en relación con el estado de salud del Sr. Al-Atoum y la situación en los centros penitenciarios durante la pandemia de COVID-19. Sostiene que durante las primeras fases de la pandemia, las autoridades —en particular en la prisión de Al-Wathba, en la que el Sr. Al-Atoum ha estado detenido— no adoptaron las medidas necesarias para evitar la propagación de la pandemia.

Deliberaciones

70. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno las comunicaciones presentadas.

71. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Al-Atoum es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Las meras afirmaciones del Gobierno de que se siguieron los procedimientos legales no bastan para refutar las alegaciones de la fuente¹³.

Categoría I

72. La fuente alega que el 14 de mayo de 2020, el Sr. Al-Atoum fue detenido por individuos enmascarados mientras compraba pan en una panadería de Abu Dabi. Según la fuente, al Sr. Al-Atoum no se le presentó una orden de detención ni se le informó sobre los motivos de su detención. En su respuesta, el Gobierno confirma que el Sr. Al-Atoum fue detenido el 14 de mayo de 2020, pero afirma que la detención se produjo de conformidad con las normas y principios jurídicos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos. El Sr. Al-Atoum fue informado del motivo de su detención, y se le presentó una orden de detención y registro, que examinó con detalle y pudo entender.

73. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que las autoridades detuvieron al Sr. Al-Atoum sin presentar una orden de detención.

74. El Gobierno no ha refutado esa alegación, en particular porque no ha proporcionado información específica para respaldar su afirmación de que sí se mostró una orden de detención al Sr. Al-Atoum, como la fecha de emisión de la orden, la autoridad que la emitió y las fuerzas responsables de llevar a cabo la detención. Las autoridades deberían disponer de esa información, máxime teniendo en cuenta la declaración del Gobierno en el sentido de que el Sr. Al-Atoum recibió información sobre la autoridad que llevó a cabo la detención y el registro, y sobre el lugar de su detención.

75. Como ha señalado anteriormente el Grupo de Trabajo, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo mediante una orden de detención¹⁴. En el presente caso, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades no presentaron una orden de detención cuando detuvieron al Sr. Al-Atoum, en contravención de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principios 2 y 4 del Conjunto de Principios¹⁵. Por lo tanto, las autoridades no establecieron el fundamento jurídico de la detención del Sr. Al-Atoum.

76. Asimismo, la fuente sostiene que tras la detención del Sr. Al-Atoum, las fuerzas de seguridad entraron en su casa por la fuerza y se llevaron su pasaporte, su computadora portátil y su teléfono celular, y acto seguido registraron su automóvil y retiraron su contenido. En su respuesta, el Gobierno afirma que se presentó una orden de registro al Sr. Al-Atoum cuando

¹³ A/HRC/19/57, párr. 68.

¹⁴ Opiniones núms. 61/2020, párr. 65; y 34/2020, párr. 45.

¹⁵ Opiniones núms. 37/2020, párr. 52; y 33/2020, párr. 54 (la presentación de una orden de detención es un procedimiento inherente a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); y A/HRC/29/26/Add.2, párr. 51.

se le detuvo, aunque tampoco proporciona ningún detalle sobre dicha orden que sustente dicha afirmación. El Gobierno no respondió a la alegación de la fuente de que las autoridades se incautaron de objetos pertenecientes al Sr. Al-Atoum.

77. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha establecido que la detención es arbitraria cuando en un procedimiento judicial se utilizan pruebas obtenidas sin una orden de registro¹⁶. En el presente caso, la fuente ha presentado indicios razonables, que el Gobierno no ha refutado, de que el registro y la incautación se llevaron a cabo sin la orden pertinente. No obstante, no está claro si las pruebas incautadas se utilizaron contra el Sr. Al-Atoum durante el juicio. Aun así, el hecho de que el domicilio y el automóvil del Sr. Al-Atoum fueran objeto de registro sin que mediara una orden judicial corrobora la conclusión del Grupo de Trabajo de que las autoridades no siguieron los procedimientos de investigación necesarios para garantizar el fundamento jurídico de la detención y la privación de libertad¹⁷.

78. Además, como ha señalado el Grupo de Trabajo, para invocar el fundamento jurídico de cualquier detención y privación de libertad, las autoridades deben informar a la persona detenida, sea por escrito u oralmente, de los motivos de la detención en el momento de esta¹⁸. La fuente y el Gobierno presentaron afirmaciones contradictorias con respecto a si el Sr. Al-Atoum fue informado de los motivos de su detención. En consecuencia, el Grupo de Trabajo no está en condiciones de determinar si se vulneró el derecho del Sr. Al-Atoum a ser informado de los motivos de su detención.

79. La fuente también alega que, durante los primeros dos meses y medio de su reclusión, el Sr. Al-Atoum no fue informado de los cargos que se le imputaban. No se le comunicaron los cargos hasta el 27 de julio de 2020, más de diez semanas después de su detención, por lo que no pudo impugnar el fundamento jurídico de su detención entre el 14 de mayo de 2020 y el 27 de julio de 2020. El Gobierno confirma que el Sr. Al-Atoum fue acusado por la Fiscalía el 27 de julio de 2020. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Al-Atoum no fue informado sin demora de los cargos, lo que infringe el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio 10 del Conjunto de Principios¹⁹.

80. Además, la fuente sostiene que el Sr. Al-Atoum fue víctima de desaparición forzada y estuvo recluso en régimen de incomunicación durante los primeros dos meses y medio de su detención, por lo que se le negó el derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial y el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención. Aunque el Gobierno afirma que el Sr. Al-Atoum pasó a disposición de la Fiscalía el 7 de junio de 2020 y que su expediente fue remitido al tribunal competente el 27 de julio de 2020, no aduce ninguna razón que justifique la demora en el examen de su caso por una autoridad judicial.

81. El Grupo de Trabajo considera que toda persona detenida y privada de libertad debe ser llevada ante una autoridad judicial en un plazo máximo de 48 horas desde el momento de la detención, y cualquier demora respecto de dicho plazo debe ser absolutamente excepcional y estar justificada por las circunstancias particulares del caso²⁰. El Sr. Al-Atoum no compareció ante una autoridad judicial hasta el 27 de julio de 2020, un día antes de que comenzara su juicio y 74 días después de su detención. Es evidente que no se respetó su derecho a comparecer sin demora ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención, en contra de lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principios 11 y 37 del Conjunto de Principios.

82. Si bien el Gobierno afirma que el Sr. Al-Atoum pasó a disposición de la Fiscalía el 7 de junio de 2020, con esa medida no se cumplió el requisito, establecido en el derecho internacional, de llevar al acusado sin demora ante una autoridad judicial. La supervisión de la privación de libertad debe corresponder a un juez y no a la Fiscalía, ya que esta no posee el grado de independencia necesario para examinar la necesidad y la proporcionalidad de la

¹⁶ Opinión núm. 83/2019, párr. 51. Véanse también las opiniones núms. 33/2019, 31/2019 y 83/2018.

¹⁷ Opinión núm. 37/2021, párr. 69.

¹⁸ Opiniones núms. 33/2020, párr. 55; y 31/2020, párr. 42.

¹⁹ Opinión núm. 61/2020, párr. 66.

²⁰ Opiniones núms. 76/2019, párr. 38; y 56/2019, párr. 80.

detención²¹. En cualquier caso, el Sr. Al-Atoum no compareció ante la Fiscalía hasta 24 días después de su detención, lo que no puede considerarse una comparecencia sin demora ante una autoridad judicial.

83. El Gobierno no respondió a la alegación de que el Sr. Al-Atoum fue víctima de desaparición forzada y estuvo en régimen de incomunicación durante los primeros dos meses y medio de su detención, sino que se centró en sus condiciones de privación de libertad actuales. A falta de refutación por el Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Al-Atoum estuvo incomunicado y desaparecido durante dos meses y medio²², y remite este caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

84. Como ha declarado el Grupo de Trabajo, la reclusión en régimen de aislamiento vulnera el derecho de las personas a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal²³. Además, la desaparición forzada constituye una forma agravada de detención arbitraria que carece de fundamento jurídico alguno²⁴. Al Sr. Al-Atoum se le negó el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención inicial y la ulterior prolongación, en contra del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 32 del Conjunto de Principios. Se le negó el derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, se le sustrajo del amparo de la ley durante los primeros dos meses y medio de su detención, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos²⁵.

85. El Grupo de Trabajo concluye que las autoridades no establecieron un fundamento jurídico para la privación de libertad del Sr. Al-Atoum, por lo que es arbitraria con arreglo a la categoría I.

Categoría II

86. La fuente sostiene que el Sr. Al-Atoum fue recluido por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Sr. Al-Atoum fue acusado de delitos tipificados en el Código Penal y en la Ley de Ciberdelincuencia a raíz de varios mensajes en Facebook en los que criticaba a las autoridades de Jordania por cuestiones relacionadas con la corrupción (véase el párrafo 12). El 7 de octubre de 2020, fue condenado a diez años de prisión, así como a la expulsión del país al término de su condena, el decomiso de sus dispositivos de comunicación y la eliminación de sus cuentas en los medios sociales.

87. En particular, la fuente sostiene que el Sr. Al-Atoum fue condenado en virtud del artículo 166 del Código Penal, en el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión para quien cometa cualquier acto hostil contra un país extranjero que pueda exponer a los Emiratos Árabes Unidos al peligro de una guerra o provocar la ruptura de las relaciones diplomáticas. En el artículo 197, párrafo 2, del Código Penal, también invocado contra el Sr. Al-Atoum, se prevén castigos para quien haga uso de cualquier medio de comunicación para difundir información o noticias que menoscaben la seguridad del Estado o sean incompatibles con la política del Estado, o para instigar actos a tales efectos. Por último, la fuente afirma que el Sr. Al-Atoum fue condenado en virtud de los artículos 24 y 28 de la Ley de Ciberdelincuencia por haber publicado “información para promover y favorecer ideas que inciten a la discordia y perturben el orden público y la paz social” y noticias que podían poner en peligro la seguridad nacional y los intereses superiores del Estado o socavar el orden público.

88. El Gobierno señala que el Sr. Al-Atoum fue acusado de varios delitos, a saber, cometer un acto hostil contra un país extranjero, utilizar la tecnología digital para difundir

²¹ Opiniones núms. 61/2020, párr. 68 y 33/2020, párr. 75; y [A/HRC/29/26/Add.2](#), párrs. 71 a 74.

²² [A/HRC/16/48/Add.3](#) y [A/HRC/16/48/Add.3/Corr.1](#), párr. 21.

²³ Opiniones núms. 36/2020, párr. 53; y 16/2020, párr. 62. Véanse también las opiniones núms. 61/2020, párr. 70; y 40/2020, párr. 29 (la falta de asistencia letrada priva a la persona detenida de una salvaguarda esencial para impugnar la detención).

²⁴ Opinión núm. 37/2021, párr. 65.

²⁵ Opiniones núms. 61/2020, párr. 70; y 76/2017, párr. 58; y [A/HRC/29/26/Add.2](#), párr. 108.

información que podría poner en peligro la seguridad del Estado y atentar contra la seguridad pública, difundir deliberadamente noticias y declaraciones falsas y tendenciosas que perturban la seguridad pública y menoscaban el interés público, y crear un sitio web para promover o favorecer cualquier programa o idea que incite a la sedición, el odio, el racismo o el sectarismo, o que socave la unidad nacional o la paz social, o perturbe el orden público y las buenas costumbres. El Gobierno no menciona ninguna disposición legislativa que haya fundamentado estas acusaciones.

89. El Gobierno confirma la condena del Sr. Al-Atoum a diez años de prisión y a la expulsión del país. Cabe destacar, sin embargo, que el Gobierno no responde a las alegaciones de la fuente de que el Sr. Al-Atoum fue privado de libertad por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión.

90. En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece el derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El Grupo de Trabajo considera que los mensajes del Sr. Al-Atoum en Facebook están amparados por el artículo 19 y que fue recluido por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho protege la expresión de las opiniones, aun en los casos en que puedan escandalizar, ofender o molestar²⁶, y cuando implican una crítica a un Gobierno extranjero²⁷. De hecho, el Grupo de Trabajo ya consideró que la privación de libertad por cargos similares había sido arbitraria en otro caso relacionado con los Emiratos Árabes Unidos, ya que vulneraba la libertad de opinión y de expresión²⁸.

91. No hay nada que indique que las limitaciones permitidas con arreglo al artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos sean de aplicación en el presente caso. El Gobierno no ha aducido ninguna razón que pudiera haber legitimado la restricción de la libertad de opinión y de expresión del Sr. Al-Atoum²⁹. El Grupo de Trabajo no está convencido de que fuera necesario enjuiciar al Sr. Al-Atoum para proteger un interés legítimo en el sentido de esa disposición, ni de que la pena que se le impuso fuera una respuesta proporcionada a sus críticas a las autoridades de Jordania. No hay pruebas que indiquen que sus mensajes llamasen, directa o indirectamente, a la violencia o que puedan considerarse razonablemente una amenaza a las buenas costumbres, el orden público o el bienestar general en una sociedad democrática. El Grupo de Trabajo remite este caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

92. El Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Al-Atoum fue resultado del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, en contravención del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así pues, su privación de libertad es arbitraria con arreglo a la categoría II.

93. El principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para que las personas puedan acceder a la legislación y comprenderla, y regular su conducta de conformidad con ella³⁰. Las disposiciones citadas del Código Penal y de la Ley de Ciberdelincuencia contienen numerosos términos imprecisos y carentes de definición y, por lo tanto, se prestan a una aplicación arbitraria³¹. En particular, se hace referencia a actos “hostiles”, “incompatibles con la política del Estado”, “que incitan a la discordia y perturban el orden público”, “que ponen en peligro la seguridad nacional del Estado” o “que socavan el orden público”. El Grupo de Trabajo reitera que las leyes pueden ser tan poco detalladas

²⁶ Opinión núm. 37/2020, párr. 56.

²⁷ Opinión núm. 76/2017, párr. 66.

²⁸ Véase la opinión núm. 76/2017.

²⁹ Aunque los cargos citados por el Gobierno hacen referencia a posibles motivos de restricción (por ejemplo, promover ideas que perturben las buenas costumbres), el Gobierno no ha expuesto ningún argumento en este sentido.

³⁰ Opiniones núms. 62/2018, párrs. 57 a 59; y 41/2017, párrs. 98 a 101.

³¹ A/HRC/29/26/Add.2, párr. 29.

con respecto a la conducta que se pretende sancionar, que es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad.

Categoría III

94. Tras haber concluido que la privación de libertad del Sr. Al-Atoum es arbitraria con arreglo a la categoría II, el Grupo de Trabajo subraya que no debería haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, el Sr. Al-Atoum fue enjuiciado y posteriormente condenado el 7 de octubre de 2020. El 28 de diciembre de 2020, su solicitud de revisión judicial interpuesta ante el Tribunal Supremo Federal se declaró inadmisibile.

95. La fuente alega que al Sr. Al-Atoum se le negó el derecho a la asistencia letrada, ya que solo pudo reunirse con su abogado durante las vistas judiciales. Su abogado no pudo visitarlo en prisión para preparar su defensa antes del juicio. Asimismo, la desaparición forzada del Sr. Al-Atoum anuló intrínsecamente su derecho a recibir asistencia letrada, a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa y a comunicarse con un asesor letrado.

96. El Gobierno afirma que, en virtud de la legislación federal vigente en los Emiratos Árabes Unidos, toda persona encausada cuyo caso se haya presentado ante un tribunal tiene derecho a nombrar un abogado. El tribunal proporcionó asistencia jurídica gratuita al Sr. Al-Atoum y se designó a un abogado para que lo representase en todas las fases del procedimiento. En sus comentarios adicionales, la fuente interpreta esta respuesta como una admisión de que el Sr. Al-Atoum no tuvo acceso a asistencia letrada desde el comienzo de su detención, en particular durante el interrogatorio.

97. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique, y tal asistencia jurídica debe facilitarse sin demora³². El Gobierno no ha respondido específicamente a la afirmación de la fuente de que el Sr. Al-Atoum no pudo reunirse con su abogado al margen de las vistas judiciales. Dado que no se proporcionó al Sr. Al-Atoum acceso a un abogado desde el inicio de su detención, y posteriormente tampoco se le permitió acceder a él con frecuencia, las autoridades menoscabaron su capacidad de preparar una defensa, en contravención de los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios 17 y 18 del Conjunto de Principios y el principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados³³.

98. La fuente sostiene además que ni el Tribunal Federal de Apelación ni el Tribunal Supremo Federal, que examinaron la solicitud de revisión judicial, pueden considerarse tribunales independientes e imparciales con arreglo al artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la fuente, el poder ejecutivo controla el poder judicial en los Emiratos Árabes Unidos. El Presidente y los magistrados del Tribunal Supremo Federal son nombrados por decreto presidencial, previa aprobación del Consejo de Ministros y ratificación del Consejo Supremo Federal. Otros jueces federales son nombrados por decreto presidencial, previa propuesta del Ministro de Justicia. En su respuesta, el Gobierno afirma que el proceso contra el Sr. Al-Atoum se llevó a cabo de conformidad con los requisitos legales aplicables, en particular, que los juicios se celebren ante un tribunal imparcial y competente con jueces especializados e íntegros que gozan de total independencia para desempeñar sus funciones.

99. El Grupo de Trabajo ha expresado su preocupación por el hecho de que en los Emiratos Árabes Unidos el poder judicial no es independiente e imparcial, ya que se encuentra sometido al control del poder ejecutivo³⁴. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Al-Atoum no fue juzgado ni su revisión judicial fue resuelta por un tribunal independiente e imparcial, lo que vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

³² Principios y Directrices Básicos, principio 9 y directriz 8; y [A/HRC/45/16](#), párr. 51.

³³ [A/HRC/29/26/Add.2](#), párr. 56.

³⁴ Opiniones núms. 61/2020, párr. 89; 31/2020, párr. 60; 55/2019, párr. 41; y 21/2017, párrs. 52 a 54. Véase también [A/HRC/29/26/Add.2](#), párrs. 30 a 39, 96 y 100.

El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

100. Por último, el Sr. Al-Atoum fue condenado por la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi. La fuente sostiene que su caso fue examinado en el nivel de apelación sin haber sido examinado por un tribunal de primera instancia. Cuando el Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi actúa en calidad de Tribunal de Seguridad del Estado, lo hace como tribunal de primera instancia y de apelación. La solicitud de revisión judicial presentada por los abogados del Sr. Al-Atoum no constituyó un procedimiento de apelación, y al Sr. Al-Atoum se le denegó su derecho a apelar. El Gobierno no respondió a estas alegaciones. A falta de refutación por el Gobierno, y teniendo en cuenta conclusiones similares en otros casos³⁵, el Grupo de Trabajo concluye que no se respetó el derecho del Sr. Al-Atoum a que el fallo condenatorio y la pena fueran sometidos a un tribunal superior, en contra de lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

101. El Grupo de Trabajo concluye que estas vulneraciones del derecho a un juicio imparcial son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Al-Atoum carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

Observaciones finales

102. La fuente formuló una serie de alegaciones relativas al trato recibido por el Sr. Al-Atoum durante su privación de libertad, en particular que se le ha negado una atención médica adecuada a pesar de que padece un desequilibrio hidroelectrolítico en el cerebro. La familia del Sr. Al-Atoum no ha podido visitarlo desde su detención, y este permaneció recluido en régimen de aislamiento desde el momento de su detención hasta el 14 de enero de 2021. La fuente sostiene que su detención prolongada en régimen de incomunicación, su desaparición forzada y su reclusión en régimen de aislamiento contravienen la Convención contra la Tortura.

103. El Gobierno afirma que el Sr. Al-Atoum no ha sido sometido a tortura ni a malos tratos, y que se le han garantizado los derechos que le confiere la ley. Se le ha permitido recibir visitas, aunque ello se limitó a llamadas telefónicas durante la pandemia de COVID-19. El Sr. Al-Atoum sigue recibiendo atención médica y se encuentra en buen estado de salud.

104. El Grupo de Trabajo recuerda que la reclusión en régimen de aislamiento durante más de 15 días consecutivos infringe las reglas 43 a 45 de las Reglas Nelson Mandela. Asimismo, la reclusión prolongada en régimen de incomunicación y aislamiento ofrece indicios razonables de un incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura en virtud del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos³⁶. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

105. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que vele por que las condiciones en todos los lugares de reclusión se ajusten a las normas internacionales. Estas incluyen las Reglas Nelson Mandela, en particular las reglas 24 a 27, relativas a la atención médica, y las reglas 43, párrafo 3, y 58, sobre el contacto con el mundo exterior³⁷. El Grupo de Trabajo insta también al Gobierno a que ponga en libertad al Sr. Al-Atoum de manera inmediata e incondicional y se asegure de que recibe la atención médica necesaria.

106. Según la fuente, unos meses antes de su detención, el Sr. Al-Atoum presentó una solicitud de asilo ante la Embajada del Reino Unido en los Emiratos Árabes Unidos, ya que temía sufrir represalias en Jordania. El Grupo de Trabajo considera que la entrega del Sr. Al-Atoum a Jordania podría constituir una vulneración del principio de no devolución y del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, e insta al Gobierno a abstenerse de hacerlo.

³⁵ Opiniones núms. 61/2020, párr. 90; y 31/2020, párr. 61; y [A/HRC/29/26/Add.2](#), párrs. 61 y 115.

³⁶ Opinión núm. 47/2017, párr. 26; resolución 68/156 de la Asamblea General, párrs. 27 y 28. y [A/66/268](#), párr. 71.

³⁷ Véase también la deliberación núm. 11 ([A/HRC/45/16](#), anexo II).

107. El presente caso es uno de los muchos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años sobre detenciones arbitrarias en los Emiratos Árabes Unidos³⁸. En determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad que infrinjan las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad³⁹.

Decisión

108. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Ahmed Majed Ahmed al-Atoum es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10, 11, párrafo 1, y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II y III.

109. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al-Atoum sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

110. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Al-Atoum inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional⁴⁰. En el contexto actual de la pandemia mundial de COVID-19 y de la amenaza que supone en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para liberar inmediatamente al Sr. Al-Atoum.

111. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Atoum y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

112. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que adapte la legislación pertinente, incluidos los artículos 166 y 197, párrafo 2, del Código Penal y los artículos 24 y 28 de la Ley de Ciberdelincuencia, para que se ajusten a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

113. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para que tomen las medidas correspondientes.

114. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

115. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Al-Atoum y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Al-Atoum;

³⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 88/2020, 61/2020, 34/2020, 33/2020, 31/2020, 55/2019, 28/2019, 30/2018, 76/2017, 58/2017, 47/2017 y 21/2017.

³⁹ Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

⁴⁰ Véase la deliberación núm. 10 ([A/HRC/45/16](#), anexo I).

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Al-Atoum y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de los Emiratos Árabes Unidos con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

116. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

117. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

118. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴¹.

[Aprobada el 16 de noviembre de 2021]

⁴¹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.